

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORIA Y ORDENACIÓN DETALLADA EN EL AMBITO DEL SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS”

(MP PGOU NÚM. 27 SUR-D 4 “CERRO DE LOS MOROS”. EXPEDIENTE 16377/19)



ESTUDIO DE IMPACTO DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y LGTBIQ

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2021



Ezquiaga

Arquitectura,
Sociedad y
Territorio S.L.

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 <i>Presentación.....</i>	4
1.2 <i>Objeto del documento.....</i>	5
1.3 <i>Justificación del documento</i>	5
1.4 <i>Eficacia y vinculación normativa.....</i>	6
2. ANTECEDENTES LEGALES Y DE PLANEAMIENTO	9
2.1 <i>Marco legislativo.....</i>	9
2.2 <i>Fases de tramitación</i>	11
3. EL URBANISMO Y LA IGUALDAD	12
3.1 <i>Glosario de términos básicos</i>	12
3.2 <i>La perspectiva de género</i>	21
3.3 <i>Transversalización de las políticas de género</i>	21
3.4 <i>Promoción de acciones para la protección de la infancia, adolescencia y familia</i>	22
3.5 <i>Promoción de acciones para la protección de personas LGTBIQ</i>	23
4. MARCO METODOLÓGICO	25
4.1 <i>Metodología propuesta</i>	25
4.2 <i>Principios.....</i>	26
4.3 <i>Objetivos</i>	30
4.4 <i>Indicadores para el diagnóstico</i>	31
5. ALCANCE A ESCALA DE LA ORDENACIÓN DETALLADA	34
5.1 <i>Diagnóstico previo</i>	34
5.2 <i>Valoración del impacto de la MPPG Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”</i>	35
6. VALORACIÓN DE IMPACTOS	44
7. MEDIDAS DE CORRECCIÓN	46

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación

El texto que se presenta recoge las consideraciones relativas al diagnóstico previo y de propuesta y recomendaciones sobre medidas a adoptar para la Ordenación Detallada del SUR-D4 “Cerro de los Moros” por parte del promotor, del equipo redactor o del Ayuntamiento de Soria. Con estas se pretende evitar la incidencia negativa y reducir o eliminar la actualmente existente en relación a la discriminación sobre los diversos grupos de personas. El compromiso con la igualdad de oportunidades propuesto mantiene una perspectiva interseccional, que incluye no sólo el género sino también la diversidad funcional, raza, edad, orientación e identidad, etc.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las políticas públicas en España deben asumir no sólo el compromiso de la erradicación de la desigualdad de género, sino la integración transversal del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Su artículo 14 establece como criterio general de la actuación de los poderes públicos el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.

Este documento, de reciente introducción en el marco del planeamiento, continúa esta línea jurisdiccional complementando los estudios de impacto de la normativa en diferentes áreas. Como corresponde a la fase de Aprobación Inicial, se trata del inicio de un proceso que quedaría abierto a información y debate. Las recomendaciones en él incluidas están pensadas para ser incluidas en la documentación de planeamiento, así como integradas en forma de mejoras en el diseño.

1.2 Objeto del documento

La finalidad de este documento es incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a todas las fases de diagnóstico, diseño, producción de normativa e implementación del Plan.

De esta manera, tiene como objetivos principales:

- Trascender los estereotipos de género utilizando fuentes de datos actualizadas y desagregadas para favorecer la representatividad.
- Adaptar la planificación urbana al uso real que le dan las mujeres al espacio público para que no resulte disfuncional, hostil o inseguro.
- Sentar las bases de una planificación urbana inclusiva con la diversidad que no perpetúe los roles de género a través del espacio.

Por otro lado, y de forma más concreta, este documento se enmarca dentro de las competencias establecidas por la legislación para la redacción del mismo:

- Evalúa el impacto de género de la MPPG en el sector “Cerro de los Moros”.
- Propone acciones dirigidas a la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito del planeamiento de desarrollo-
- Las medidas incluidas en el presente informe responden a una selección priorizada estratégicamente, buscando una mayor eficacia y asegurando su impacto, implementabilidad y éxito. Esto, a su vez, fomenta una mayor visibilidad que resulta positiva en este aspecto.

1.3 Justificación del documento

El contenido de este documento se sitúa conceptualmente entre diferentes herramientas:

- Memoria de análisis.
- Informe de Impacto redactado en el marco de la legalidad europea y española.

- Dictamen sobre el documento de la MPPG en el sector “Cerro de los Moros”.

Estos tres enfoques se aúnan con el fin de cubrir funciones diferentes:

- Reflexión acerca de las discriminaciones sociales en el espacio, en particular de género.
- Divulgación de los análisis al respecto.
- Detección de las medidas y políticas útiles para la consecución de la igualdad.

1.4 Eficacia y vinculación normativa

El origen del Informe de Impacto de Género se encuentra en las conferencias de Naciones Unidas (Conferencia de la Mujer en Pekín, 1995 y otras), cuyas reflexiones son recogidas por la Unión Europea (Tratado de Ámsterdam, Niza). Los estados miembros, como España, trasladan los principios europeos a su legislación. Podemos encontrar el germen de lo que consideramos evaluación de impacto en las guías elaboradas por las Comisiones Europeas, que dan cierta forma a los conceptos y la estructura de trabajo para las evaluaciones y se incorporarán posteriormente como referencia.

En España la perspectiva de género se aplica por primera vez a través de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno (que modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que regulaba las iniciativas legislativas), introduciendo la obligatoriedad de incorporar un informe de impacto de género a cada una de ellas.

De manera amplia, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres recogía cómo “las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el

acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas”.

Las regulaciones sobre iniciativas legislativas se concretan en dos reales decretos, uno en 2009 y el último el Real Decreto 931/2017 por el que se regula la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Una memoria de este tipo recoge la evaluación del impacto que el proyecto de norma propuesto tiene en diferentes aspectos: su impacto económico y presupuestario, sus cargas administrativas, el impacto de género, infancia, adolescencia y familia, y otros que pudieran considerarse (LGTBIQ, etc.). El Ministerio de Hacienda elabora para este particular una Guía Metodológica que define su estructura en base a lo convenido en las recomendaciones europeas.

Posteriormente las distintas comunidades elaboran su propia legislación y desarrollan estrategias y manuales al respecto. A partir de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León aprobada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, se define como competencia exclusiva autonómica (artículo 70.1. 11ª) “La promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de violencia de género”.

En el marco legislativo autonómico, la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, regula el marco de actuación en orden a promover la igualdad real de la mujer, contemplando los aspectos de promoción de la igualdad de oportunidades. Posteriormente, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, Contra la Violencia de Género en Castilla y León pretende ser un instrumento efectivo para erradicar la violencia de género, potenciando los instrumentos de prevención y sensibilización en la sociedad y articulando los mecanismos necesarios para prestar una atención integral a las víctimas.

La relación en la legislación de los contenidos o estructura para abordar un Informe sobre el impacto o la incidencia del planeamiento en la discriminación ciudadana o de género, posee una regulación en los marcos legales estatal y autonómico en lo que concierne a la actividad legislativa. En el caso de Castilla y León la Ley

1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación de Impacto de Género en Castilla y León, determina la obligatoriedad de evaluar el impacto de género en leyes y demás disposiciones administrativas.

El presente documento se centra en el nivel de recomendaciones y propuestas para el propio documento de la MPPG del sector “Cerro de los Moros”, así como para el desarrollo posterior de los procesos de participación, gestión y ejecución.

La eficacia de este documento será por lo tanto verificable a medio plazo, tanto en el plano divulgativo como en el de adopción de medidas concretas, y en la incorporación de estas cuestiones a los procesos de participación ya establecidos.

2. ANTECEDENTES LEGALES Y DE PLANEAMIENTO

2.1 Marco Legislativo

Naciones Unidas

- Declaración de Pekín y Plataforma de Acción. Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Pekín (1995)
- Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 con sus Protocolos facultativos
- Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007

Unión Europea

- Carta Europea de la Mujer en la Ciudad (1996)
- Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos (1998)
- Consejo de Lisboa (2000)
- Consejo Europeo de Niza (2000)
- Convenio de Estrasburgo (2008, ratificado en 2010)
- Convenio sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (2010)
- Declaración de Riga Agenda Urbana de la UE (2015)
- Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo (1996, ratificado en 2014)
- Pacto de Ámsterdam (2016)

Ley Orgánica

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor

- Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
- Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia

Ley Estatal

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. (BOE 6 de noviembre de 1999)
- Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia doméstica. (BOE 1 de agosto de 2003)
- Ley 30/2003 de 22 de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno

Decreto

- Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo

Ley Regional

- Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León.
- Ley 13/2010, de 9 de diciembre, Contra la Violencia de Género en Castilla y León.
- Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación de Impacto de Género en Castilla y León.

Plan

- Plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Castilla y León 2013-2018

2.2 Fases de tramitación

La tramitación urbanística se establece en concordancia con lo establecido por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que en su artículo 165, relativo al procedimiento de aprobación del planeamiento de desarrollo y su aprobación por parte del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, la información pública de instrumentos de planeamiento urbanístico viene establecida por el artículo 155 del mismo Decreto.

TRAMITACIÓN URBANÍSTICA

1- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN (adoptar acuerdo antes de 12 meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial)

2- CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA

Información Pública (2 a 3 meses) + Informes Administraciones + Recepción alegaciones + Notificación propietarios afectados

3- INTRODUCCIÓN EN EL DOCUMENTO DE LAS CORRECCIONES PERTINENTES

(plazo de 3 meses a contar desde la recepción del acuerdo)

Si tales correcciones supusieran cambios sustantivos en la ordenación, el nuevo documento volverá a ser sometido a información pública

4- REMISIÓN DOCUMENTO TÉCNICO DEL PLAN AL ÓRGANO AMBIENTAL

Subsanación determinaciones

5- APROBACIÓN DEFINITIVA

3. EL URBANISMO Y LA IGUALDAD

3.1 Glosario de términos básicos

Discriminación

Hablamos de discriminación cuando, en sociedades estructuradas jerárquicamente de cara al acceso a derechos o recursos, se produce la marginación sistemática de un grupo de personas.

La legislación en materia de no discriminación tiene por objeto que todas las personas tengan acceso equitativo y justo a las oportunidades que ofrece la sociedad.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad y capacita al Consejo para que adopte acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La totalidad de motivos de discriminación se mencionaron por primera vez en el Tratado de Ámsterdam.

La Directiva de igualdad de trato en el empleo que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, creencia religiosa, edad y discapacidad en el ámbito del empleo.

En 2009, el Tratado de Lisboa introdujo una cláusula horizontal encaminada a integrar la lucha contra las discriminaciones en el conjunto de las políticas y acciones de la Unión (artículo 10 del TFUE).

Pleno acceso

Cuando hablamos de pleno acceso y disfrute nos referimos a la capacidad y posibilidad de todas las personas para las distintas funciones sociales y humanas,

en relación a la utilización y servicio del espacio habitable y accesible, dentro del marco legal y social de la convivencia democrática.

Diversidad

El término diversidad remite a la diferencia o a la distinción entre elementos: a la variedad, a la infinidad o abundancia en la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. En el terreno de lo social se relaciona con la *identidad*, ya sea cultural, étnica, religiosa, de género, etc.

Igualdad

La diversidad es el concepto que subyace a la igualdad. La igualdad en la diversidad propone un nuevo paradigma en el que todas las experiencias tienen la misma legitimidad. Esto es así en especial cuando varias facetas de la diversidad *intersecan*: sólo dentro del colectivo “mujeres” encontraremos mujeres de rentas altas y bajas, mujeres trabajadoras y no trabajadoras, mujeres ancianas, niñas y adolescentes, mujeres migrantes, mujeres en situación de calle, etc, conviviendo en la ciudad y con necesidades de uso del espacio diferentes - que a su vez son diferentes de las de los varones.

La toma de medidas para la igualdad se basa en la premisa de que la sociedad no puede autorregular sus dinámicas de discriminación, por lo que resultan necesarias acciones positivas que venzan su inercia.

En el contexto europeo la igualdad se menciona dentro de los valores de base de la Unión (artículos 2 y 3.3 del Tratado de la Unión Europea). El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) faculta a la UE para que adopte medidas que eliminen las desigualdades y la insta a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres a través de todas sus políticas. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aneja al Tratado de Lisboa, contiene un capítulo titulado «Igualdad» donde se establecen los principios de no discriminación, de igualdad entre mujeres y hombres, y de diversidad cultural,

religiosa y lingüística. Asimismo, aborda los derechos del niño, de las personas mayores y de las personas discapacitadas.

Sexo/Género

La dicotomía sexo/género se desarrolla en los años sesenta para hacer frente a concepciones biologicistas de las expectativas sociales y normas de conducta que debían seguir mujeres y hombres. Estas, como han desarrollado las ciencias sociales a partir de este momento, son culturalmente variables y se aprenden en los primeros años de vida social. De igual modo, los propios conceptos de sexo y género han evolucionado, especialmente a partir de los años noventa, gracias a las aportaciones de campos desde la filosofía hasta la medicina: sexo hace referencia a las categorías con las que se clasifica el cuerpo en función del dimorfismo sexual, y *género* a las categorías con las que se clasifican las identidades sociales en correlación no biunívoca con el cuerpo sexuado.

Igualdad de género

Se entiende por igualdad de género la posibilidad de todas las personas para desarrollar sus posibilidades vitales, autonomía, agencia y libertad de elección sin encontrarse limitadas por discriminación, expectativas o prejuicios basados en su género. La igualdad puede ser legal (de iure), habitualmente un primer paso para llegar a la igualdad social real (de facto).

En la Unión Europea el principio de igualdad entre mujeres y hombres se estableció en el Tratado de Roma de 1957 respecto a la igualdad de retribución. Desde entonces, una serie de directivas europeas (por las que cada país debe elaborar su legislación) han ampliado el principio de igualdad para abarcar las condiciones laborales, la seguridad social, el acceso a productos y servicios, la

protección de la maternidad y el permiso parental. El Tratado de Lisboa convirtió el principio de igualdad en un valor común de la UE.

La Comisión adoptó la *Estrategia para la Igualdad entre hombres y mujeres 2010-2015*, como fruto del Plan de Trabajo 2006-2010, que describe las acciones clave previstas, incluido el fomento de:

- la misma independencia económica para las mujeres y los hombres;
- igualdad de retribución por un trabajo de igual valor;
- misma representación en la toma de decisiones;
- dignidad, integridad y erradicación de la violencia de género;
- promoción de la igualdad en terceros países;
- problemas de horizontalidad (papeles en función del sexo, incluido el papel de los hombres, legislación e instrumentos de gobernanza).

Familia

La familia es una institución social y jurídica cuyos derechos se encuentran recogidos en el artículo 39 de la Constitución Española. Éste cita la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Como cédula básica del cuerpo social, la familia queda definida por las relaciones de parentesco (de afinidad, paternidad y filiación) y muy frecuentemente por situaciones de cohabitación. Por este motivo se ha considerado tradicionalmente la base de la perpetuación social, no sólo demográfica (la familia nuclear formada por una pareja y su descendencia) sino cultural. Sin embargo, cabe destacar que no existe una definición consensuada de la misma más allá de las aproximaciones que los estudios sociales, desde sus orígenes, han hecho.

Hoy en día el contexto occidental y español de plaza da cabida a multitud de formas de familia, fruto de una transformación demográfica y social que ha tenido lugar a lo largo de décadas: familias homoparentales, monoparentales, multiculturales, extensas, familias mixtas simples o complejas (en situación de

desplazamiento, cuya unión es obligada para la supervivencia), familias reconstituidas, etc.

Igualdad de la infancia y adolescencia

La infancia y adolescencia son fases del desarrollo humano comprendidas entre el nacimiento y la plena autonomía de la juventud. Se considera un periodo de vulnerabilidad y dependencia vinculada al crecimiento biológico y al pleno desarrollo de las facultades psicológicas y sociales.

La protección de la infancia y adolescencia queda tipificada en el Derecho español a través del artículo 39 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a la protección social, económica y jurídica de la familia y en especial de los menores de edad. Durante dos décadas esto ha resultado en el principal marco regulador de los derechos de los menores, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Así lo recogen las actuales Ley 26/2015, de 28 de julio, y Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que incorporan los cambios a la legislación fruto de los cambios sociales producidos en la situación de los menores para una garantía adecuada del deber de protección.

La legislación actual consta de cuatro artículos, recoge la trayectoria internacional de Convenciones de Naciones Unidas: sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 con sus Protocolos facultativos; y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007.

También se mencionan Convenios impulsados por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado el de 30 de junio de 1995 y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de

responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 6 de septiembre de 2010.

Por último, se toma en consideración tres Convenios del Consejo de Europa, el relativo a la adopción de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, ratificado el 16 de julio de 2010, el relativo a la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado el 22 de julio de 2010, así como el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 2014.

Orientación sexual

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otras personas. Es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo; puede distinguirse también entre orientación romántica y orientación sexual.

Identidad de género

Alude a la percepción subjetiva de la persona tiene sobre sí misma en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características sexuales primarias y secundarias. Constituye uno de los tres elementos de la identidad sexual junto

a la orientación sexual y el rol de género, relacionándose «con el esquema ideoafectivo de pertenencia a un sexo» (Chávez Carapia, 2004).

Expresión de género

Atributos externos, comportamiento, apariencia, vestimenta, etc a través de los cuales las personas expresan y los demás perciben su género.

LGTBI o LGTBIQA+

Siglas que representan al colectivo formado por Lesbianas, Gays, Trans*, Bisexuales, Queer, Intersex, Asexuales, y otros géneros y orientaciones. En los últimos años se ha acuñado el término GSD (Géneros y Sexualidades Diversas) para recoger todas estas identidades de manera más comprensiva de acuerdo a un paradigma de diversidad no basado en el binario.

Lesbiana / Gay

Persona de orientación sexual monosexual hacia personas de su mismo género.

Bisexual o pansexual

Persona de orientación sexual plurisexual hacia personas de su propio u otros géneros.

Transgénero, Trans*

Término paraguas que alude a las personas cuya identidad de género, expresión de género o comportamiento no se ajusta a aquel que se le ha asignado al nacer en base a sus caracteres

sexuales primarios. La identidad de género está vinculada al sentido de una persona de sí mismo y el sentido de ser hombre, mujer u otros.

Intersex

Las personas que no son fácilmente clasificados como “hombre” o “mujer”, basada en sus características físicas al nacer o después de la pubertad. Esta palabra sustituye el término apropiado “hermafrodita”.

Queer

Término *paraguas* que hace referencia tanto a la orientación sexual como a la identidad de género. Su raíz anglosajona subraya la noción de extrañeza o rareza, resignificando su tradicional connotación peyorativa para dotarlo de contenido político.

Asexual

Persona cuya orientación sexual y/o orientación romántica no se dirige hacia ninguna otra.

Igualdad de orientación e identidad sexual

La situación jurídica de la homosexualidad y diversidades sexuales en el mundo es desigual. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en su artículo 2 los derechos y libertades de todas las personas y afirma que la condición sexual no puede suponer distinción alguna en el uso y disfrute de estos derechos, actualmente 80 países del mundo prohíben legalmente la homosexualidad y 10 la penan con la muerte. Otros, en cambio, permiten el matrimonio igualitario y la adopción y reflejan una situación jurídica más igualitaria.

El Consejo de Derechos Humanos, en su Resolución 17/19 de 2011, condena formalmente cualquier acto de violencia o discriminación por orientación sexual e

identidad de género en cualquier parte del mundo. También prohíbe esa discriminación el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, reafirmado con la puesta en vigor de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y servicios y su suministro y la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, transpuesta a la legislación española y que incluye explícitamente la orientación sexual.

La Constitución española recoge en su artículo 9 la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, al tiempo que obliga a los poderes públicos, tanto a facilitar esa participación, como a promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sociales en que se integra sean reales y efectivas, con remoción de los obstáculos que impidan su plenitud. Estos valores se explicitan en el artículo 10. Además, en su artículo 14 reconoce que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, hasta la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual no se menciona por primera vez la orientación sexual en un texto legal español de ámbito nacional.

En la Comunidad de Madrid, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón

de Orientación e Identidad Sexual regulan el marco normativo que protege la igualdad de las personas LGTBIQ.

3.2 La perspectiva de género

El término perspectiva de género alude al análisis de fenómenos, políticas o procesos teniendo en cuenta las diferencias que se producen en base al género. En concreto, la perspectiva de género presta especial atención a las diferencias en status, poder y acceso a los recursos, en tanto que configuran un escenario de discriminación, y trata de determinar de qué maneras éste determina nuestras necesidades e intereses.

Los estudios de género han aplicado este enfoque en el entorno académico de forma interdisciplinar para valorar la situación de las mujeres, los hombres y sus relaciones de género. De forma interseccional, la perspectiva de género se ha utilizado para examinar la situación y opresiones de las personas LGTBIQ, los sistemas de cuidados de niños y mayores, etc.

3.3 Transversalización de las políticas de género

A lo largo de la década de los noventa se producía la cristalización del compromiso internacional con la transversalización de las políticas de género o *gender mainstreaming*, término adoptado por Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín de 1995; en Europa por el Tratado de Ámsterdam en 1998; y en España en distintas leyes que trasponen las directivas europeas, en particular la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es también relevante la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno y que atañe directamente a la práctica del planeamiento.

La transversalización de la perspectiva de género es un principio en las políticas de igualdad que propone la integración del enfoque de género en todos los

campos de las políticas públicas, de tal forma que actúen complementariamente entre sí y complementando también las acciones y medidas por la igualdad que toman organismos competentes en la materia. Esta transversalización del enfoque de género debe producirse en todas las fases del proceso de concepción, diseño, programación, presupuesto, gestión, ejecución y seguimiento de las políticas. Es una manera de evidenciar las implicaciones de cualquier medida tanto en hombres como en mujeres (y potencialmente en otros grupos de población), haciendo de su experiencia y sus necesidades una parte integral. El objetivo último es conseguir la igualdad de género.

El *gender mainstreaming* implica cambios estructurales en el desarrollo de cualquier política, en diferentes escalas. Supone modificaciones en la forma de concebir el diseño de políticas, las distintas personas implicadas, la atención a los sesgos conscientes e inconscientes, etc. por parte de las administraciones. Habitualmente se selecciona una serie de medidas básicas, que permiten el cambio estructural, a la vez que propone una batería de acciones de gran impacto.

La aplicación de estas reflexiones y recomendaciones en el plano de la ciudad tuvo su primer ejemplo visible en Viena, constituyendo un punto de partida sin precedentes: una empresa de gran escala promovida públicamente que sentó los principios para el diagnóstico e implementación de la perspectiva de género en el urbanismo.

3.4 Promoción de acciones para la protección de la infancia, adolescencia y familia

Son objetivos específicos en materia de igualdad respecto de la familia, la adolescencia y la infancia elementos como los que se contienen a continuación, y que son de algún modo inseparables del diseño de un espacio inclusivo como es

el contenido concreto de este informe, con independencia de que éste se produzca desde la visión del género:

- Conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, y fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. Este objetivo tiene una incidencia de segundo orden en el diseño urbano, si bien es posible aplicarlo a través de su consideración en los usos complementarios al uso principal en cada parcela.
- Promover la participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al ocio y al tiempo libre en igualdad de oportunidades y en entornos seguros, en aras de un desarrollo sostenible. El Plan debe ser sensible a la creación de espacios apropiados y seguros, tal como se explica en los apartados correspondientes de diagnóstico.

3.5 Promoción de acciones para la protección de personas LGTBIQ

La principal característica del análisis del espacio desde una perspectiva LGTBIQ es la invisibilidad de sus relaciones. Se producen dinámicas que podemos considerar propias de este colectivo que, por otro lado, resultan muy variadas entre sí ya que LGTBIQ se refiere a una categorización que engloba muchas identidades.

Como características comunes de la experiencia LGTBIQ de la ciudad podemos citar aquellas que tienen como denominador común la sanción de la ruptura con la norma de expresión de género tradicional, así como la constatación de una situación general de mayor vulnerabilidad: vulnerabilidad a la discriminación y/o acoso laboral o en el lugar de estudios (un porcentaje superior al 50% de menores sufre discriminación y/o acoso, lo que redunda en su percepción de la seguridad y acceso al espacio); a la inseguridad en el espacio público; a quedar en situación de marginación (mayor dificultad de acceso a renta, negación de servicios, carencias habitacionales, desestructuración y carencias de vínculos de

cuidado...); a quedar en situación de calle; dinámicas de segregación espacial como socialización-protección...

Las acciones de protección toman la base de los principios de Yogyakarta, enunciados en 2006, que recogen una suerte de Declaración de Derechos Humanos LGTBIQ. De forma resumida las medidas pueden articularse alrededor de los siguientes ejes, a través de los cuales los derechos de igualdad, dignidad y humanidad de las personas quedan garantizados:

1. Garantía del pleno acceso a todos los espacios
2. Garantía de seguridad en todos los espacios
3. Representatividad en los procesos de participación e información
4. Facilidades en la localización de espacios de seguridad y socialización

4. MARCO METODOLÓGICO

4.1 Metodología propuesta

El análisis de género de un proyecto urbano no puede concebirse de manera independiente a las herramientas de la disciplina urbanística. No se trata, por lo tanto, de crear un nuevo set de herramientas que añadir a las anteriores sino de hacer visible el papel que el género tiene en las primeras y en los territorios objeto de transformación. Sólo de este modo y bajo la premisa de la igualdad (de acceso a los recursos, de autonomía, de acceso y disfrute del espacio público y privado...) puede llegar a proponerse nuevas directrices de diseño o desarrollarse herramientas de planeamiento más pertinentes. De forma similar se han establecido metodologías específicas en el caso de vulnerabilidad socioeconómica, racial, funcional y de accesibilidad, etc.

La metodología propuesta constituye una continuación de las metodologías de transversalización de políticas de género aplicadas tanto en el territorio español como en los diferentes casos de éxito en Europa: incorpora las directrices a nivel europeo y estatal en la materia así como las conclusiones alcanzadas por las Naciones Unidas en las Conferencias Mundiales de la Mujer que vienen trabajando con el territorio desde mediados de los noventa, e incorporan perspectivas de diseño inclusivo no concebidas en inicio desde una perspectiva de género pero que dotan de herramientas especialmente útiles para la gestión de información compleja, diversidad y desigualdad.

En consonancia, se sigue la metodología propuesta en la Guía Metodológica aprobada por los Ministerios de la Presidencia, Economía y Hacienda, Política Territorial e Igualdad, tal como se enuncia en la Disposición adicional primera del Real decreto 1083/2009 por el que se regula la memoria de análisis del impacto normativo.

El análisis del Plan en el término municipal de Soria se centra en el contenido documental. En relación con el mismo, se determinan los principios generales para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres que son de aplicación en relación con el proyecto, así como una serie de indicadores para facilitar la medición de su cumplimiento.

El análisis del Plan se centra en su contenido documental, que en cumplimiento del artículo 142 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León incluye:

- Memoria informativa y vinculante
- Normas urbanísticas
- Planos de información y ordenación pormenorizada.
- Estudio de impacto ambiental (conforme a las art. 157 del Reglamento).
- Estudio de impacto paisajístico
- Resumen ejecutivo

Así mismo, el presente Plan comprende los estudios y planes siguientes:

- Estudio de tráfico.
- Estudio hidrológico.
- Estudio acústico.
- Memoria de impacto normativo.
- Estudio de impacto de género, familia, infancia, adolescencia y LGTBIQ.
- Estudio de sostenibilidad económica.

4.2 Principios

El principio transversal que rige el análisis y la propuesta de modificaciones a lo largo de este documento es la garantía de igualdad de oportunidades y acceso a

los recursos, como establece la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

A nivel internacional, encontramos principios de orden más genérico enunciados en la Conferencia de Mujeres de Beijing, entre los cuales destacamos:

- Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
- Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
- Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.
- Empezar reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
- Alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es un objetivo en sí mismo –el Objetivo 5– dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sin duda el documento que enfoca dichos principios de una manera más clara al campo del urbanismo y la ordenación territorial es la Carta Europea de Las Mujeres en la Ciudad, que tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) en 1996, y concretamente sus 12 puntos:

1. *Ciudadanía activa*
Consecución de una representación democrática más realista.
2. *Toma de decisiones*
Igualdad en la democracia en todos los niveles de toma de decisiones.
3. *Igualdad de oportunidades*
Debe promocionarse la igualdad de oportunidades en educación e investigación, en los puestos de trabajo y en todas las profesiones relacionadas con el planeamiento territorial y la ciudad, con el espacio urbano, la vivienda, la movilidad y la seguridad en las ciudades.
4. *Participación.*
Las mujeres deben poner en marcha procesos de participación igualitaria que favorezcan vínculos renovados de solidaridad.
5. *Vida diaria.*
La vida cotidiana vista a través de los ojos de las mujeres debe convertirse en un tema político.
6. *Desarrollo sostenible.*
Las mujeres deben estar totalmente involucradas en políticas para el mantenimiento del equilibrio ecológico en nuestro planeta.
7. *Seguridad y movilidad.*

Todas las mujeres, y particularmente las mujeres solas y menos privilegiadas, deben tener fácil acceso al transporte público con el fin de poder vincular libremente y disfrutar plenamente de la vida económica, social y cultural en la ciudad. Las mujeres también tienen derecho a la ciudad.

8. *Hábitat y vivienda.*

Calidad y diversidad en la vivienda y la proximidad de los servicios públicos.

9. *Género.*

Promover la educación relacionada con el género y una nueva filosofía democrática.

10. *Investigación local y educación.*

Adquisición de conocimiento y capacitación, seguimiento constante de las varias etapas de progreso y aplicación práctica a nivel cotidiano.

11. *El papel de los medios de comunicación y la transmisión de la experiencia:*

Transmisión y extensión del conocimiento y la capacitación.

12. *Redes*

Establecimiento del escenario para el cambio a través de políticas fuertes y afirmativas a nivel europeo. Divulgación de la Carta.

Las competencias y capacidad de transformación del Plan se circunscriben a sus herramientas de ordenación y gestión, y particularmente al impacto que puedan ejercer sus ordenanzas urbanísticas.

4.3 Objetivos

Como consecución de los principios generales, la evaluación conjunta del impacto de género, infancia, adolescencia y familia define como objetivos:

- a. Ordenación del ámbito de modo que contribuya a la disminución de las desigualdades de género, edad, orientación sexual, expresión o identidad de género y situación de dependencia presentes en la zona. Promoción de diseños que creen espacios amigables a la labor de cuidados.
- b. Eliminación o, al menos, disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos de pleno acceso al territorio, movilidad, seguridad, y habitabilidad para todas las personas independientemente de su género, edad, orientación sexual, expresión o identidad de género y situación de dependencia.
- c. Representación equilibrada de mujeres, hombres, niños y ancianos, y personas LGTBIQ, incorporando sus experiencias como parte de diagnósticos participativos y las preceptivas fases de información pública. En su defecto, lograr una representación similar al de su presencia en el ámbito.
- d. Establecimiento de objetivos y medidas coordinadas con las administraciones competentes que contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores atribuidos tradicionalmente a las mujeres o a los hombres, a las expresiones sociales de la feminidad y la masculinidad, etc., con el fin de su no discriminación.
- e. Garantía de cumplimiento de estas y otras normas, planes e instrumentos jurídicos dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad. Establecimiento de mecanismos de seguimiento y mejora de los mismos.

4.4 Indicadores para el diagnóstico

Los indicadores se utilizan extensivamente en el diagnóstico previo y de impacto en la práctica de la transversalización de género. Se ha escogido ejes de especial relevancia en lo tocante a la influencia sobre la calidad de vida de las mujeres y el cambio hacia un paradigma de ciudad inclusiva.

Indicadores espaciales
Transporte y movilidad
Disponibilidad de transporte público en un radio caminable
Acceso seguro y poco distante al transporte público
Frecuencia adecuada del transporte público con refuerzo en las horas punta de horario laboral y escolar
Elementos de templado de tráfico, que permita la libertad de movimiento de las personas más vulnerables y quienes las cuidan
Existencia de carriles bici
Pendientes reducidas para garantizar la accesibilidad plena al espacio
Amplitud de aceras
Espacios libres y seguridad
Inclusión de espacios libres que cubran las necesidades de relación, juego o acceso a la naturaleza con seguridad e independencia.
Dotación adecuada de parques infantiles y de mayores.
Presencia de alumbrado público en aceras y parques.
Mezcla de usos para fomentar la presencia de personas en la calle
Equipamientos y ocio, comercio y actividad económica
Existencia de equipamientos básicos próximos a la vivienda
Existencia de comercio de proximidad
Existencia de equipamientos sanitarios y educativos próximos a la vivienda
Indicadores de contenido normativo
Identificación en la norma de la legislación y mandatos normativos con perspectiva de género, menores, familia y LGTBIQ que afectan al ámbito de intervención del planeamiento urbanístico
Realización de un diagnóstico previo de la situación de mujeres, hombres, niños y adolescentes, familias, y personas LGTBIQ en el ámbito de intervención del planeamiento urbanístico; existencia de estadísticas; representatividad

Mención del principio constitucional de igualdad entre personas sin discriminación por género, edad, orientación, identidad o expresión sexual, etc.
Mención a la normativa de igualdad de género, de protección de adolescencia e infancia, y de protección contra la LGTBIfobia
Indicadores de gestión
Participación y gasto público
Atención a los grupos vulnerables específicos (mujeres, adolescentes, niños, mayores, LGTBIQ, etc.) en los mecanismos de participación
Previsión de partidas presupuestarias destinadas a programas contra la discriminación
Previsión de una institución o comisión cuyo cometido sea la implementación de acciones por la igualdad o la gestión de los conflictos derivados de la desigualdad en el transcurso de la ejecución del Planeamiento

5. ALCANCE A ESCALA DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

5.1 Diagnóstico Previo

El ámbito de aplicación del Plan se encuentra sin desarrollar en el momento actual. Se analiza la inserción del plan en el ámbito que lo rodea como las dinámicas más amplias de esta zona de Soria y el valor de lo existente frente a la alternativa propuesta, que propone la inclusión de vivienda plurifamiliar en la búsqueda de un modelo urbano compacto junto al centro urbano próximo y una mejora del trazado geométrico del viario estructurante acorde con la topografía del lugar.

La población total de Soria es de 39.112 personas según datos del Padrón de 2018. Soria está experimentando una disminución de la población desde el año 2012. Esta tendencia negativa ha ido oscilando entre ligeros aumentos y descensos, como el aumento de 0.59% variación relativa en 2018. El tramo con más vecinos es el comprendido entre 50 y 54 años con 7.233 personas. La pirámide invertida se confirma con 3.187 vecinos menores de cuatro años. La población extranjera muestra una evolución en crecimiento que alcanza su tasa más alta en 2010 con el 12,22% para después descender hasta 10,13% en 2018.

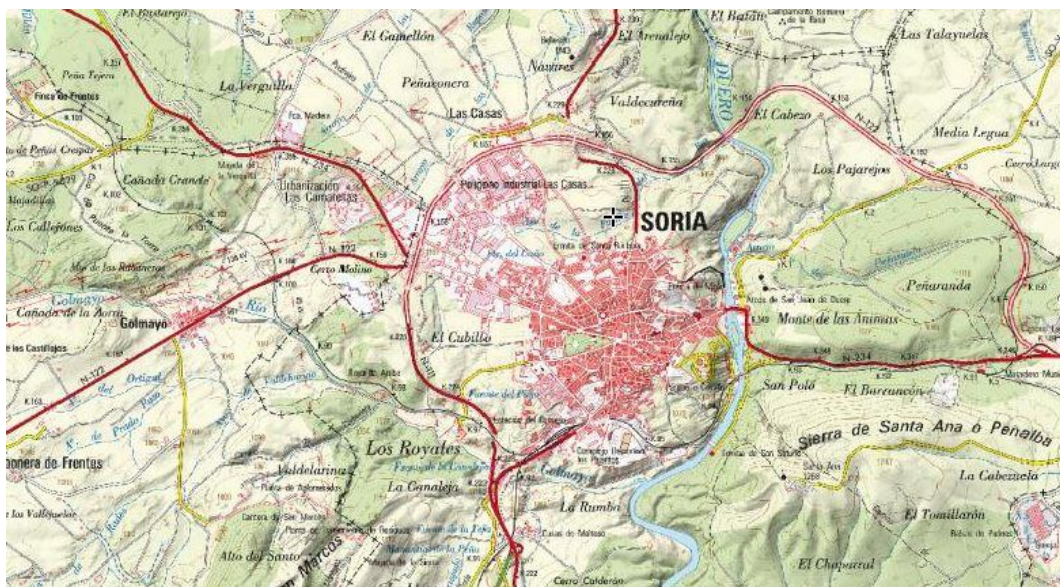


Imagen 1 Localización en el término municipal de Soria

El Cerro de los Moros se encuentra en el sudeste del término municipal de Soria, enmarcado entre el centro urbano de Soria, el parque de El Castillo, el Complejo Deportivo Los Pajaritos y el río Duero. La orografía del sector es determinante para su ordenación, produciéndose ascensos hasta la cima del cerro y descensos acusados hasta el río Duero.

5.2 Valoración del impacto de la MPPG sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”

Transporte y movilidad

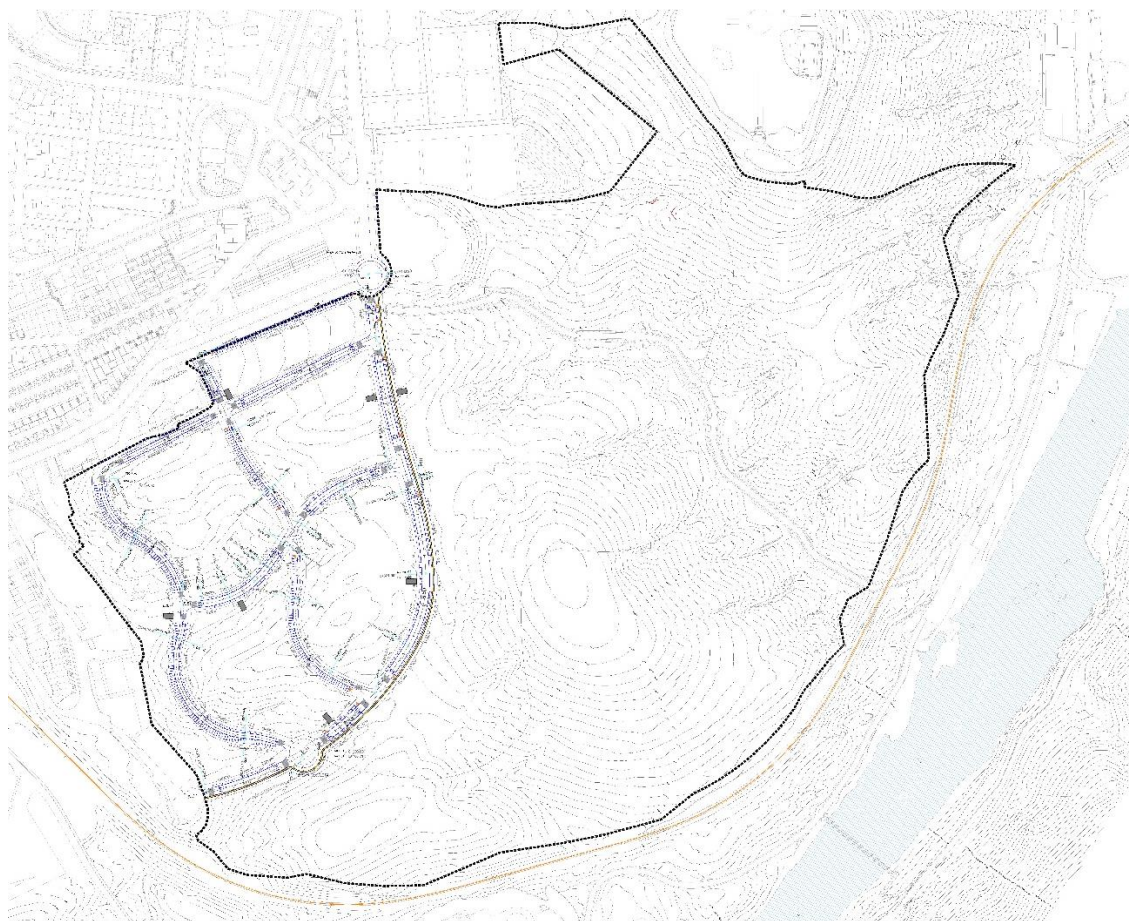


Imagen 2 Plano de Ordenación del trazado viario de la ordenación propuesta

El ámbito carece actualmente de accesibilidad, aún en contacto con el centro urbano al norte por la calle Cerros de los Moros y al oeste por la calle del centro polideportivo “Los Pajaritos”. El PGOU prevé articular el sector con el centro urbano mediante la conexión norte-sur del Paseo de Valabos y la calle del centro polideportivo “Los Pajaritos”, y la conexión este-oeste mediante otra vía de mismo rango y que constituye la prolongación del Paseo San Prudencio. Esta última vía discurre con un trazado sinuoso adaptándose a la orografía y así reduciendo la pendiente del trazado que desciende hacia el río Duero. La nueva zona a urbanizar se completa con viales de menor rango que permiten el acceso a las viviendas resultando una cuadrícula viaria que se adapta a la topografía del ámbito.

En resumen, existen dos jerarquías de viales propuestos en el interior del sector: por un lado, una jerarquía mayor de viales que tienen un carril por sentido de circulación y comunican el sector con el centro urbano, y después una jerarquía local, de vías de menor tamaño que dan acceso a la zona residencial y que tienen igualmente uno carril por sentido. Las aceras poseen un ancho variable dependiendo si poseen aparcamiento o no entre 4 a 2,5m. En todas las vías existe aparcamiento ya sea en línea o batería.

El acceso al transporte público es limitado, a pesar de la cercanía con el centro urbano. Las líneas 1 y 3 de transporte urbano de Soria circulan por la Calle Juan

Antonio Simón y son las únicas paradas accesibles a pie, encontrándose a una media de 80m de distancia en el punto más cercano y 1,5 km en el más lejano.

.Indicadores:

Objetivo	Valoración
Disponibilidad de transporte público.	0
Frecuencia adecuada del transporte público con refuerzo en las horas punta de horario laboral y escolar.	0
Acceso seguro y poco distante al medio de transporte.	0
Elementos de templado de tráfico, que permita la libertad de movimiento de las personas más vulnerables y quienes las cuidan.	+2
Existencia de carriles bici.	0
Pendientes reducidas para garantizar la accesibilidad.	+1
Amplitud de aceras	+1

Puntuación: +1 ó +2 (Impacto positivo)

-1 (Impacto Negativo)

0 (No hay datos o no procede)

Espacios libres y seguridad



Imagen 3 Plano Imagen de la ordenación propuesta

La MPPG que se propone trata de compatibilizar los valores naturales y paisajísticos de este ámbito y el medio urbano, y conseguir un equilibrio entre zonas verdes, equipamientos y actividades residenciales y terciarias. Los espacios libres reservados se conciben para mejorar la calidad de vida del ámbito y generar un espacio de convivencia comunitaria que permita el desarrollo adecuado de capacidades sociales, defendiendo el derecho al juego, al ocio y al tiempo libre en igualdad de oportunidades y en entornos seguros

El PGOU continua el sistema de espacios verdes que respeta y protege la ribera del Duero configurándose un parque lineal de muy importantes dimensiones al servicio de la ciudad. El resto de espacios verdes de carácter local se ubican de manera que completan dicho parque lineal y conectan la zona residencial

propuesta con las zonas verdes. En este sentido, se considera de importancia la comunicación peatonal de los espacios verdes con el centro urbano. Por este motivo, las zonas verdes acompañan el camino asfaltado y bien iluminado existente que comunica peatonalmente el centro urbano con la ribera del Duero. Adicionalmente los equipamientos propuestos por la ordenación se sitúan en contacto con las zonas verdes para promover sinergias entre ambos. Destaca la naturalización propuesta de las parcelas uso residencial promoviendo una mejor integración en un entorno de alto valor natural y paisajístico.

Se pretende generar un área urbana donde se integran los usos y tipologías residenciales, sin espacios residuales asociados a la vivienda plurifamiliar.

Todo ello supone una revalorización natural y ambiental del sector formada por zonas verdes de diferentes voluntades bien comunicadas mediante viario amplio e iluminado.

Indicadores:

Objetivo	Valoración
Inclusión de espacios libres que cubran las necesidades de relación, juego o acceso a la naturaleza con seguridad e independencia.	+2
Dotación adecuada de parques infantiles y de mayores.	0
Presencia de alumbrado público en aceras y parques.	+2
Mezcla de usos para fomentar la presencia de personas en la calle	+1

Puntuación: +1 ó +2 (Impacto positivo)

-1 (Impacto Negativo)

0 (No hay datos o no procede)

Vivienda

Los usos residenciales pretenden concentrarse al noroeste del sector por su superficie más apta para su desarrollo, evitando las cotas topográficas que

descienden al río Duero. Al mismo tiempo, esta localización supone la continuidad con el centro urbano conectado con vías circundantes de manera clara y sencilla. Se busca la creación de espacios aptos para albergar usos residenciales y de actividad económica, abriendo nuevas posibilidades al progreso social y

económico de la población. Se propone la tipología de bloque de vivienda colectiva de baja altura apoyado en viales.

Indicadores:

Objetivo	Valoración
Variedad tipológica para la integración de distintos modelos de familia.	0
Inclusión de vivienda protegida para la integración de diversos niveles de renta	+1
Inclusión de espacios comunes de cuidados en el residencial plurifamiliar	+2
Distribución equitativa de la renta familiar	0

Puntuación: +1 ó +2 (Impacto positivo)

-1 (Impacto Negativo)

0 (No hay datos o no procede)

Equipamientos y ocio, comercio y actividad económica

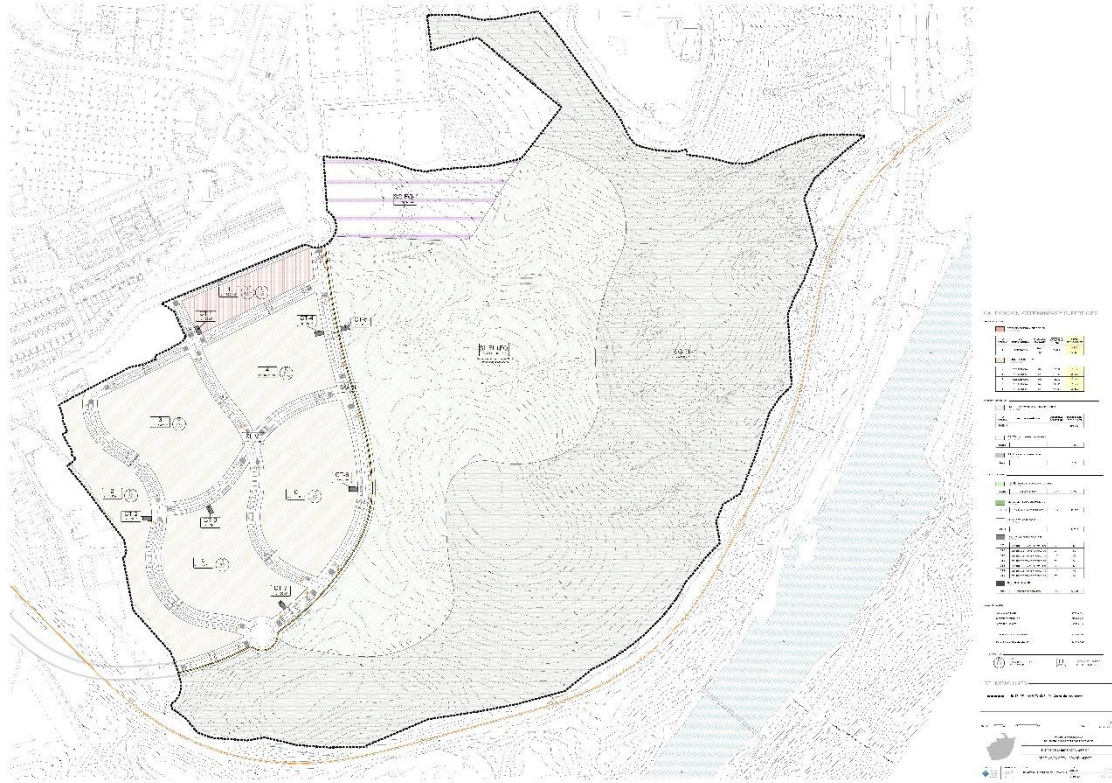


Imagen 4 Plano de la calificación del suelo resultante de la ordenación pormenorizada

Se considera como uso global del sector el uso residencial y sus usos complementarios de terciario o dotacional evitando la creación de las tradicionalmente llamadas “áreas dormitorio”, representa el 50% de la superficie edificable del sector. Se considera como uso pormenorizado característico el uso dotacional, que suponen casi 50.000 m² de superficie edificable del sector. Se consideran usos pormenorizados permitidos aquellos que no están expresamente prohibidos en el Plan General ni en este documento como el uso industrial.

Encontramos grandes equipamientos educativos y deportivos al oeste del sector, a una distancia de 800m. El resto de servicios básicos como centro de salud se encuentran en el centro urbano a una distancia caminable, y desplazamiento amable. Como es característico, el comercio de proximidad se concentra en las calles comerciales del centro urbano.

Indicadores:

Objetivo	Valoración
Existencia de equipamientos básicos próximos a la vivienda	+1
Existencia de comercio de proximidad	+1
Existencia de equipamientos sanitarios y educativos próximos a la vivienda	+1

Puntuación: +1 ó +2 (Impacto positivo)

-1 (Impacto Negativo)

0 (No hay datos o no procede)

Participación y gasto público

El Ayuntamiento de Soria cuenta con una Concejalía de Acción Social cuyo objetivo es la igualdad apostando por dar herramientas a mujeres y jóvenes para reducir situaciones de desventaja. Adicionalmente, posee el canal de participación Consejo Municipal de la Mujer que dan visibilidad a asociaciones reivindicativas entorno a los derechos de las mujeres. El ayuntamiento ha elaborado unos presupuestos participativos juveniles “Soria en construcción” destinadas a desarrollar políticas que impulsen la participación juvenil.

Indicadores:

Objetivos	Valoración
Previsión de partidas presupuestarias destinadas a medidas y proyectos con el objeto de eliminar la discriminación	+1
Previsión de una institución o comisión cuyo cometido sea la implementación de acciones por la igualdad o la gestión de los conflictos derivados de la desigualdad en el transcurso de la ejecución del Planeamiento	+1
Atención a los grupos vulnerables específicos (mujeres, adolescentes, niños, mayores, LGTBIQ, etc.) en los mecanismos de participación	+2

Puntuación: +1 ó +2 (Impacto positivo)

-1 (Impacto Negativo)

(No hay datos o no procede)

6. VALORACIÓN DE IMPACTOS

Los impactos se valoran de la siguiente manera:

- Impacto positivo: La actuación revierte en algún modo con sus determinaciones las desigualdades o situaciones de exclusión detectadas en el ámbito
- Impacto negativo: La actuación agrava con sus determinaciones las desigualdades o situaciones de exclusión detectadas en el ámbito
- Impacto neutro: La actuación no tiene un impacto apreciable en las desigualdades o situaciones de exclusión, o provoca efectos positivos y negativos simultáneamente

Del examen de los indicadores y observaciones mencionadas en este documento se deduce una transición adecuada de la morfología del centro urbano consolidado hacía las zonas de borde del río Duero. La concentración de usos resulta especialmente adecuada para el acceso seguro de las mujeres y personas vulnerables a diferentes horas del día, aunque hay que tener en cuenta el tamaño de sus parcelas y la condición de borde de los desarrollos.

La tipología plurifamiliar junto a sus usos pormenorizados terciario y dotacional reducen la posibilidad de espacios residuales en beneficio de la seguridad del ámbito. Se valora positivamente la mezcla de usos activos próximos al centro urbano ya que facilita la conciliación del trabajo, de la vida personal y familiar, así como la abundancia de espacios libres de buena accesibilidad entorno a dichos usos.

El viario propuesto garantiza el pleno acceso a todos los espacios, excepto las áreas más próximas al río Duero para evitar su degradación ambiental. La existencia de viario de jerarquía menor estructura el interior del ámbito de forma adecuada a los usos residenciales y terciarios.

Es importante a su vez la cualificación de los viarios, atendiendo al tamaño adecuado de aceras, alumbrado público, pendientes limitadas, atención a la ordenación de parques con áreas de estancia y de recreo, integración de los

equipamientos deportivos, establecimiento de vías peatonales cercanas a viario y edificaciones y bien iluminada.

El impacto se considera **POSITIVO** desde el punto de vista de GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, FAMILIA, Y DE PERSONAS LGTBIQ.

7. MEDIDAS DE CORRECCIÓN

Se refieren a continuación una serie de medidas respecto al Plan que nos ocupa, ordenadas de mayor a menor grado de prioridad, y que se considera deben reflejarse en el correspondiente proyecto de urbanización. Se ha atendido, fundamentalmente, a la trascendencia que la medida propuesta tiene sobre el impacto de género, infancia, adolescencia y familia, a la viabilidad en su ejecución y la magnitud de los cambios a los que se refiere.

Prioridad 1: Cualificación de espacios libres públicos y privados, y accesibilidad universal y referencia a los equipamientos públicos

Se recomienda garantizar las siguientes medidas:

- Visibilidad desde los edificios hacia el espacio público, a través de ventanas amplias y balcones transparentes, escaparates de tiendas, entradas de edificios, garitas de portería, etc.
- Evitar callejones sin salida y edificios con plantas bajas abiertas y vacías.
- Utilización de instrumentos reflectantes (paneles o espejos) en los lugares donde no es posible garantizar una visibilidad directa.
- Diseño de espacios libres con vegetación altamente permeable para permitir la visibilidad y favorecer la vigilancia en las zonas de máxima afluencia, y espacios públicos más referenciales. Se deben evitar las terrazas, desniveles, muros de contención y otras acciones sobre el paisaje que dificulten su lectura y provean puntos muertos o escondites.
- Dotar las aceras y todos los caminos de tránsito peatonal o ciclable de alumbrado urbano, lo que se relaciona directamente con la plena accesibilidad al espacio y la sensación de seguridad. Se debe evitar el uso de lámparas de alta intensidad que pueden provocar deslumbramientos y zonas de sombra.

- Uso de iluminación en escaparates, letreros o edificaciones privadas que favorezca la iluminación del espacio público y permitan el acceso a las mismas de manera segura.

Prioridad 1: Dotación de transporte público

Uno de los pilares básicos del planeamiento inclusivo es la vinculación coordinada del desarrollo de suelo y de las infraestructuras de transporte público que garanticen el pleno acceso de las mujeres a sus puestos de trabajo de forma rápida y en condiciones de calidad y seguridad, al igual que a la infancia, adolescencia y familia a los espacios dotacionales y servicios públicos. Dicha coordinación debe garantizarse a iniciativa de las administraciones municipales, en un nivel de competencia superior al que corresponde el Plan que nos ocupa.

Sin embargo, puede aconsejarse el establecimiento de opciones de intercambio modal, principalmente respecto de modos blandos, como la bicicleta, y el aseguramiento de los desplazamientos peatonales, en condiciones de seguridad y confort, dando continuidad a estos trayectos en el espacio físico, con la previsión de cruces peatonales, y carril bici. Todos estos espacios deben estar adecuadamente iluminados, y con la señalética necesaria para su comprensión y uso.

Son elementos a garantizar, evitando fracturas de la red/movimientos de las personas:

- Evitar creación enclaves o áreas aisladas debido a su falta de accesibilidad. Los enclaves cortan los flujos en su interior, causando problemas en las áreas circundantes y generando débiles movimientos interiores; por este motivo adolecen de bajo control espontáneo y son más proclives al desarrollo de actividades marginales o delincuencia. Se relaciona los enclaves, además de con una disminución en los transportes y servicios, con un lugar de gran aislamiento y vulnerabilidad social.

- Dar continuidad al trazado vial, y al conjunto de modos de desplazamiento, especialmente el desplazamiento peatonal y ciclable, para favorecer el movimiento constante y el control espontáneo de las trayectorias.
- Disposiciones extrovertidas, que vinculen el nuevo desarrollo con el tejido urbano circundante, y vías directas que unan el viario interno con el del tejido existente de forma abierta.
- Garantizar la accesibilidad al transporte público, evitando la localización de paradas en zonas de escaso control informal y considerando los recorridos que deben realizarse para llegar hasta ellas, que deben ser claros y seguros, sujetos a control espontáneo. Se deben localizar las paradas en la cercanía inmediata de las edificaciones, y preferiblemente con los dos sentidos enfrentados visualmente, para disminuir la vulnerabilidad de la espera.
- Permitir flujos en todos los viales, creando vías mixtas para peatones, bicicletas y en su caso vehículos (controlando la seguridad peatonal con límites de velocidad y elementos de templado de tráfico), de forma que los tránsitos peatonales vean reforzada su seguridad a través del movimiento constante y el aumento de la vitalidad.
- Clara orientación en el espacio para los peatones, capacitándolos para comprender inmediatamente la organización del entorno en el que se están moviendo y fomentando su sensación de seguridad.
- Establecer cruces de manera fácil y segura mediante el diseño de espacios de trazado claro, sin obstáculos al tránsito y al control visual como pasos subterráneos o elevados, etc. En los casos en que estos sean de obligada ejecución o preexistentes, se recomienda la utilización de dispositivos electrónicos como sistemas de vídeo-vigilancia.
- Zonas de aparcamiento preferiblemente a nivel de calle que, dentro de edificios, basando su diseño en criterios de prevención de la criminalidad. Favorecer su visibilidad desde las edificaciones, evitando situarlas bajo el nivel de calle o rodeadas por muros.
- Garantizar la accesibilidad a todas las edificaciones de los servicios de emergencia, tales como policía, ambulancia, bomberos, SAMUR social, etc.

- Establecer los servicios de recogida de basuras, etc. que están en la vía pública de forma que no produzcan espacios no controlados.